

»Aun cuando muchos de los casos citados en la apelación habrían ocurrido poco después del levantamiento militar de septiembre pasado, otros son más recientes, según el documento. Entre ellos menciona a una madre de dos hijos, identificada como Amapola Lizette Ruiz, de 29 años, quien habría sido detenida el 17 de marzo último por cinco soldados en un barrio modesto de la capital. Agrega el documento que su hermana la ha estado buscando desde entonces sin éxito.

»Cita también el caso de Sergio Héctor Salinas Tamayo, de 48 años de edad, casado. Dice que fue arrestado en una fábrica hace tres semanas por cinco personas que se identificaron como agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Agrega que los esfuerzos de sus parientes para tratar de averiguar su paradero fueron infructuosos "a pesar de haber visitado sitios de detención, cárceles, estadios, morgue, hospital, etc"

»Otro caso mencionado es el de un empleado de servicio de energía eléctrica de Santiago, Luis Alberto Gerlach Zúñiga, de 23 años, de quien afirma que ha sido arrestado el 27 de febrero sin que se sepa nada de él».

Todo lo anterior no es más que un pálido reflejo de lo que comenzó a ocurrir desde el momento que los generales y almirantes en contacto con el Pentágono decidieron cometer un genocidio con un tercio de la población chilena para salvaguardar los intereses económicos de un puñado de oligopolios del dólar.

El asesinato de civiles indefensos, así, ha pasado a ser más que un castigo, un alivio para los centenares de miles de hombres, mujeres, ancianos e incluso niños brutalmente torturados cotidianamente por la maquinaria montada por el almirante Merino y los generales Leigh, Mendoza y Pinochet.

Las torturas

A principios del mes de noviembre de 1973, los pocos campesinos que transitaban por el Puente Las Tejuelas, a dos o tres kilómetros de Chillan, sobre el río Nuble, se dieron cuenta que ya las aguas comenzaban a bajar por el cese de la época de las lluvias. Y junto con ese fenómeno visto tantas veces, otro, nuevo y horroroso: la aparición de decenas de cadáveres de personas sin cabeza, degolladas, con las manos atadas a la espalda. Muchos de los cadáveres estaban semipodridos; otros no tanto. Los campesinos fueron a avisar al puesto de Carabineros de la

salida de la ciudad; la respuesta fue ésta: «Ustedes no han visto nada. Si cuentan lo que vieron, los tomaremos presos y los degollaremos igual que esos cadáveres.»

Eran los restos de la operación «exterminio» en la provincia de Ñuble. Restos semejantes a los de cualquier otra provincia de Chile después del 11 de septiembre. Restos dejados por la bayoneta, ametralladora y aparatos de tortura de los militares chilenos.

Poco antes, en el puerto de Talcahuano, la Sociedad Pesquera Arauco tuvo que suspender varios días sus faenas porque en los peces llegados para su trabajo, se encontraban restos de seres humanos! Eran de los cadáveres que la marina chilena iba a lanzar mar adentro.

Una periodista, cuyo nombre no puedo citar porque correría peligro en Chile, me cuenta cómo, en el río Mapocho, que atraviesa Santiago, comenzaron a aparecer cadáveres de personas torturadas y luego fusiladas:

«Durante las primeras semanas de octubre me tocó pasar casi todos los días, muy temprano, por el puente Bulnes, que cruza el río Mapocho. La primera vez me negué a creer lo que vi. No podía ser cierto. Desde lejos pude ver que en las barandas del puente y en los bordes del río se agolpaba gran cantidad de gente. Estaban mirando los cadáveres. Cuatro cuerpos de hombres que semiflotaban. Todavía recuerdo que uno de ellos llevaba una camisa roja. Un poco más lejos, un quinto cadáver, que había sido arrastrado hasta la orilla. La escena se repetía todos los días. Y no sólo en ese puente, también los pude ver en el puente Pedro de Valdivia. Decenas de mujeres se apostaban todos los días en los puentes con la esperanza de ver pasar el cadáver de su esposo o hijo desaparecido. Un día, vi nueve cadáveres, todos con el torso desnudo y las manos atadas a la espalda. Los cuerpos perforados a balazos. Y junto a ellos, el cadáver de una niña, de aparentes quince o dieciséis años».

Los niños nunca fueron ajenos a la furia militar. El día 18 de septiembre, una patrulla militar fue a buscar a su domicilio a José Soto, artesano mueblista en hierro forjado, presidente de la Junta de Abastecimientos y Control de Precios en su barrio de Quinta Normal. Soto no estaba. La patrulla militar sólo encontró a su hijo de 14 años. Lo apresó. Y después lo fueron a botar a la puerta de la casa, fusilado. «Para que el hijo de puta no sea maricón y se entregue», les gritaron los militares a los vecinos. José Soto y su familia están ahora fuera de Chile, por eso se

